

C.A. de Temuco

Temuco, cinco de enero de dos mil veintidós.

**Vistos**

Comparece ROMÁN GÓMEZ CONTRERAS, abogado, en representación de la demandada Rendic Hermanos S.A., en los autos ordinarios laborales caratulados “TRONCOSO TRONCOSO WALTER WLADIMIR Y OTROS con RENDIC HERMANOS S.A.”, RIT O-224-2021, interponiendo , recurso de nulidad en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2021, dictada por la Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, doña Viviana Ibarra Mendoza, que estableció que el despido sufrido por los demandantes por la causal de necesidades de la empresa, no se encuentran ajustados a derecho, y son improcedentes, condenando a pagar el recargo legal del 30% y la devolución por descuento por aporte al seguro de cesantía, entre otra prestaciones a mi representada.

**PRIMERA CAUSAL DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 478 LETRA B) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.**

Establece el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, que el recurso de nulidad es procedente cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

En tanto, el artículo 456 del mismo cuerpo legal establece que el Tribunal debe apreciar la prueba conforme las reglas de la sana crítica, y que, al hacerlo, deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Habiendo despedido mi representada a la demandante por la causal de necesidades de la empresa, esta parte dio cabal cumplimiento

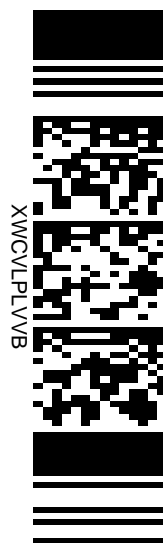


a lo dispuesto por el artículo 454 N°1 del Código del Trabajo: “No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio hechos distintos como justificativos del despido.”

A este respecto, esta parte rindió prueba documental, confesional y testimonial concluyente, que acreditó fehacientemente que la desvinculación de los trabajadores no fue un hecho arbitrario ni caprichoso de mi representada, sino fundado en un proceso de reestructuración de diversos establecimientos de Supermercados Unimarc a nivel nacional, en especial el local de Unimarc ubicado en avenida Caupolicán 0191, de Temuco, donde se desempeñaba los demandantes como Operadores de Panadería y Pastelería la señora Gloria Carilaf, Erica Lefimil y Jeanett Anabalón, de Operador de Lácteos y Congelados el señor Carlos Linares, de Primer Ayudante de Recepción el señor Marcelo Muñoz, y de Bodeguero el señor Walter Troncoso, toda vez que atendida la mala situación económica que aqueja a todo el comercio producto de la pandemia, sumado a las limitaciones impuestas por las autoridades pertinentes que permiten aforos máximos tanto de clientes como de trabajadores, hicieron completamente inviable mantener un número excesivo de trabajadores, todas circunstancias que fueron acreditadas en estrados.

Lo anterior ha generado modificaciones de productividad y rentabilidad del comercio, además de producir modificaciones en las condiciones en que se desarrolla el mercado, especialmente el comercio que ejerce mi representada Rendic Hermanos S.S. en sus establecimientos Unimarc.

En el caso específico del establecimiento Temuco Caupolicán, se encontraba constantemente en cuarentenas totales desde la llegada del Coronavirus, sin existir certeza de cuándo terminará.



Mi representada, frente al complejo escenario al que se ha venido enfrentando, ha debido modificar necesariamente las dotaciones a nivel nacional en los locales comerciales, de diversas áreas, atendido principalmente que los costos de operación son notablemente superiores a los ingresos de estos.

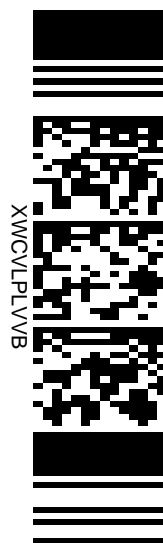
A pesar de lo indicado, la sentencia termina exigiendo más allá de lo indicado por el artículo 454 N°1 del Código del Trabajo, y de los hechos indicados de la misiva de despido, y erradamente rechaza la causal de despido.

Si no se permitiere poner término al contrato de trabajo de un dependiente por los motivos expuestos y de manera justificada, finalmente se está derogando tácitamente la causal.

No admitir la procedencia justificada de esta causal para hechos como los especialmente descritos, implicaría limitar la legítima administración de una empresa, escenario en el cual los trabajadores que ahí se desempeñen gozarían de una especie de inamovilidad en el empleo o fuero laboral, toda vez que nunca se podría despedir sino mediante el pago de un recargo adicional del 30% por sobre las indemnizaciones por años de servicio, lo que llevaría a un absurdo que no puede tener cabida en el derecho.

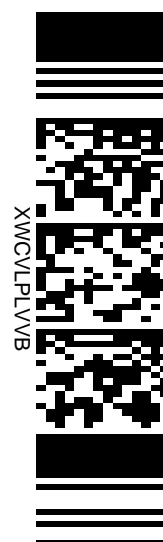
La causal invocada se fundamenta en que Rendic Hermanos S.A. ha debido implementar un proceso de reestructuración, racionalizando puestos de trabajo con el objeto de hacer frente a una crisis mundial, que tuvo un fuerte impacto en el sector y que ha tenido como principal característica la incertidumbre.

En relación con lo anterior, y para efectos de lo dispuesto en el artículo 454 N°1 del Código del Trabajo, debe atenderse esta parte a los hechos y fundamentos que justificaron la decisión de despedir a los demandantes y los cuales fueron contenidos en las correspondientes cartas de despido, basándonos en los antecedentes y consideraciones que se explican a continuación.



Mi representada rindió decisiva prueba para acreditar el proceso de renovación y reorganización, consistente principalmente en prueba testimonial, en circunstancias que declaró en estrados el testigo don Mauricio Edgardo Pardo Erices, quien ejerce el cargo de administrador del local Unimarc de Caupolicán Temuco, e indica en lo pertinente que ahora tienen turno por la pandemia hace más de un año. Conoce a los demandantes, sabe que es por despido, fueron desvinculados por la pérdida de venta el 2020 de 500 millones por la pandemia, era insostenible para la empresa. Se le consultó cuánto perdía mensualmente, indicando 100 millones y un poco más, los meses que no había cuarentena, se compara 2020 con 2019. Se le pregunta cuáles fueron las medidas económicas, responde en relación con la desvinculación del local no daban los números, fuerte pérdida mes a mes. El presupuesto es por local, el número de trabajadores versus los ingresos por local y depende de las ventas. La sección con más despido fue pastelería, baja venta y gran cantidad de trabajadores. Se le pregunta el año 2020 cómo funcionaba en cuanto a hornos y atención a público, responde se acortó se cerraba a mediodía, se ajustó al toque de queda al estado de excepción. El año 2021 horario rotativo y cerraban a las 8, antes a las 10 pm cierre a publico ahora incluso 7:30 pm, y jornada de mañana turno. Ahora turno rotativo, se hizo para evitar contagios masivos, el resto del día se funciona por turnos separados. Se le pregunta cuál es el estado del grupo SMU, responde lo que sabe es que tiene un déficit de utilidades y deuda por la pandemia. No hay un buen estado financiero.

Inclusive al ser contrainterrogado se le pregunta cómo sabe de la perdida por 500 millones, responde que él maneja los estados de resultados, es el administrador lleva el control. Mes a mes son 500 millones anuales. Se le pregunta si se ha contratado más gente, responde sólo por licencia y permisos de ley de crianza protegida mientras dura la licencia.



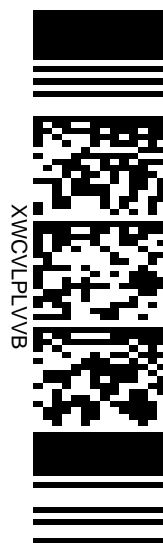
Asimismo, compareció en estrados el testigo doña Soledad Griselda Reyes Solís, quien ejerce el cargo de Servicio a Personas, en Unimarc de Caupolicán. Indica que conoce a los demandantes, fueron despedidos por las bajas ventas que ha habido desde el año 2020-2021, los cargos más afectados fueron panadería y pastelería bodega, recepción, y otro más. El horario los años 2020 principios del 2021 en relación con el 2019 son distintos, el 2020 turno de 8 a 3:30 y de 3:30 y 22:30, el 2020 funcionó al comienzo y hubo algunas personas que no estaban de acuerdo, fue para protección. Horario atención al público 2020, hasta después del toque de queda, primer tramo del 2020 a las 7 y después a las 8:00, pero en general a las 7:00 antes panadería a las 10 era super tarde colaboradores terminaban las 23 horas. Se le pregunta por la afluencia de público y los aforos, responde que se redujo a la mitad.

Incluso al ser contrainterrogada, se le pregunta antes de la pandemia la sección de panadería cuántos trabajadores tenía y cuántos ahora, responde el año pasado como cuatro o cinco personas en panadería y pastelería y ahora sólo una persona una niña contratada para cubrir licencia y ley de crianza.

A mayor abundamiento S.S., esta parte incorporó un documento consistente en Oficio respuesta en causa O-202-2021 que daba cuenta de más de 2.420 despidos por necesidades de la empresa entre febrero y marzo de 2021, sumado a publicaciones de diarios digitales que dan cuenta de la fuerte caída del comercio, todas circunstancias que permiten concluir la existencia de un proceso de reorganización de mi representada.

Inclusive en la prueba confesional de doña Erica Lefimil reconoce que efectivamente el supermercado este afecto a aforos y cierres anticipados de funcionamiento.

Destacamos también S.S., la confesión de doña Zilpa Esparza en representación de Rendic Hermanos S.A., quien consultada por conducta de compra los clientes, responde las compras hoy han ido

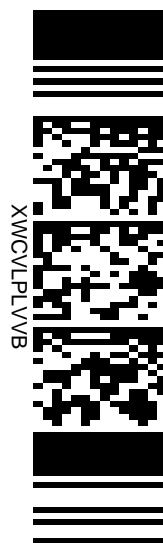


cambiando van directamente al producto necesario más reducido. Se le pregunta si esto último consta en la carta de despido, responde que no, es genérica, es igual para todos. Agrega que entiende que cada local tenía sus propios números para defender este tema, responde cuando digo esto es porque es un modelo, en cada carta no se ponen las pérdidas de cada local. Indica tener 26 sucursales a su cargo. Las secciones más afectadas son pastelería y bodega menos abastecimiento. Se le pregunta si fue la misma carta a nivel nacional, responde que sí, y si son distintas secciones la misma carta. Ella la envió a los locales, tiene 26 tiendas y se les envió distintas cartas de distintas desvinculaciones de distintos cargos. Se le pregunta cómo afecta la legislación al funcionamiento de la empresa, responde la nueva normativa por la pandemia. Añade la pérdida no es sólo tema de venta, sino mermas y gastos, si el local no da un débito no es rentable para que sea viable en el tiempo.

Todo lo anterior en relación con los efectos de la pandemia, son hechos públicos y notorios S.S. que han ocurrido en todo el comercio, que fueron corroborados expresamente por los testigos, acreditando el contenido fáctico de las cartas de despido.

Aún con lo anterior, la Juez A Quo determinó que en este caso no se verificaron las necesidades de la empresa, según lo expuesto por mi representada en la carta de despido comunicada a los demandantes, exigiendo más antecedentes de los propios indicados en la misiva.

La sentencia desestima clara prueba testimonial, confesional y documental por ser genérica y no estimarla suficientemente o atingente, y el mismo hecho de que no se ha contratado personal que sustituya a los actores, que dan cuenta de que la desvinculación de estos no es un hecho aleatorio o caprichoso, sino un proceso de reestructuración que tiene fundamentos reales y objetivos, basados principalmente en la reestructuración por la baja de ventas desde el inicio de la pandemia, que ha derivado en desvincular a varios trabajadores de los locales de Unimarc de Temuco.

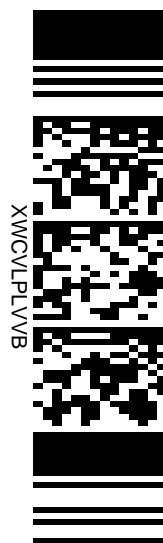


A mayor abundamiento S.S., existen fallos de este mismo Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco que han atendido a este especial y grave panorama para el comercio nacional, producto de la pandemia, donde destacamos una sentencia de fecha 04 de febrero de 2021 de la Il. Corte de Apelaciones de Temuco, que rechaza el recurso de nulidad intentado por la parte demandante, confirmando el rechazo de la demanda por despido injustificado por la causa de necesidades de la empresa, sosteniendo:

“QUINTO: Así, el fallo refiere que la Carta Aviso dada al trabajador señala una serie de causas a nivel mundial, nacional y regional que demuestran la disminución considerable de ventas e ingresos de la empleadora. Dicha comunicación satisface la exigencia legal, y, además, concluye que a la luz de los antecedentes que se indican en ella, aparece de manifiesto que no se trata de una decisión arbitraria o fundada en la sola voluntad del empleador, sino que de hechos objetivos y externos.

SEXTO: Luego, el fallo continúa su análisis señalando que la prueba rendida le permite tener por acreditados los hechos descritos en la carta, analiza la prueba documental rendida, los informes, antecedentes tributarios y comerciales que respaldan la decisión, los testigos deponen con claridad y precisión sobre las readecuaciones realizadas. La viabilidad del proyecto empresarial, conforme el testimonio rendido, se encuentra amenazada como efecto de las prácticamente nulas ventas que ha habido durante este año, lo que tiene respaldo documental con los gráficos, certificados de declaración y pago de impuestos y libro de remuneraciones.

SEPTIMO: La sentencia trata especialmente la situación del demandante, señalando que su desvinculación constituye una medida razonable para la buena marcha de la empresa, considerando que sus funciones eran de encargado de adquisiciones, las que tienen que ver con el nivel de obras que se ejecutan, y frente a las pocas o nulas ventas, la necesidad de adquirir insumos, productos o materiales,

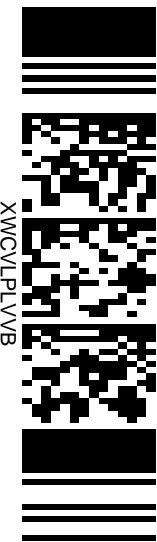


malamente puede justificar mantener el cargo en una persona especialmente contratada para ese efecto. Consideró a este respecto que, la Iltna. Corte de Apelaciones de Temuco, Tercera Sala, Rol Laboral Cobranza 249-2020, “Ulloa con Industria Magisur Limitada”, 04 de febrero de 2021. revisado el libro de remuneraciones, el sueldo que percibía el actor era considerablemente mayor al resto de los funcionarios, lo que justifica que haya sido él y no otro quien fuera desvinculado, dado que producía un ahorro considerable. Concluye, a este respecto, que la restructuración a que hace referencia la carta tiene que ver con que las funciones que desempeñaba el demandante fueron suplidas por otros trabajadores que continuaron en la empresa.” (El destacado es nuestro)

La sentencia transcrita precedentemente viene en confirmar la sentencia dictada con fecha 21 de agosto de 2020 en causa RIT M-457-2020 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, del cual destacamos el siguiente considerando al rechazar la demanda de despido injustificado:

“DECIMO PRIMERO: La causal del artículo 161 inciso 1° del código laboral, según lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia mayoritaria, tiene un carácter objetivo y no puede depender de la mera voluntad del empleador para que sea procedente.

Se ha puntualizado que: “... La causal de necesidades de la empresa está contemplada como una causal de término del contrato de trabajo objetiva, independiente de la voluntad de las partes y que dice relación exclusivamente con circunstancias que rodean la actividad económica de que se trata. Los casos contemplados en la Ley apuntan a circunstancias económicas o tecnológicas. Para su configuración es necesario que las circunstancias no emanen de la sola voluntad o responsabilidad de la empresa, de modo que estas deben ser objetivas, graves y permanentes. Los problemas de la empresa no deben ser transitorios y subsanables. La ley al referirse a las necesidades de la empresa no sólo se refiere a las necesidades de carácter técnico, sino





que también de orden financiero o económico”. (Código del Trabajo, Nueva Justicia Laboral Tomo I Director Luis Lizama Portal edición 2010, Editorial Puntolex SA).

De ahí que al haberse acreditado todos y cada uno de los fundamentos invocados en la carta de despido, se puede concluir que la decisión de la empleadora, en orden a desvincular al actor, no fue caprichosa, sino que, relacionada con circunstancias externas, de duración indeterminada y que han afectado seriamente su actividad.

La necesidad de desvincularlo aparece vinculada con la eliminación de su cargo y la redistribución de sus funciones en el resto del personal, lo que significa un ahorro importante de recursos mes a mes.

Por último, la causal de despido está en el Código del Trabajo y tiene una obvia finalidad que es garantizar al trabajador contar con indemnizaciones que otra causal no contempla, frente a su salida de la empresa por razones ajenas a la mera voluntad de las partes del contrato, finalidad que se cumple en el caso de autos.” (El destacado es nuestro)

Sin embargo, la sentencia concluye contrariando toda la prueba rendida, que esta parte no logró acreditar la necesidad contenida en la hipótesis del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, aun cuando toda la prueba allegada a estrados apuntaba a una conclusión completamente contraria.

Denunciamos la infracción de las normas de apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, pues bajo este sistema de prueba el sentenciador debe resolver conforme las pruebas allegadas al proceso, analizando las mismas probanzas bajo el límite de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Así lo ha resuelto la Iltrma. Corte de Apelaciones de Concepción: “La ley, en consecuencia, no entrega un concepto de lo que es “sana crítica”, empero aporta algunos parámetros que deben tenerse en



cuenta a la hora de efectuar el análisis y la correspondiente ponderación de los diversos medios probatorios legalmente incorporados al juicio.

Sin embargo, puede decirse que, en términos generales, la sana crítica es un método razonado y reflexivo de analizar el material probatorio acompañado al juicio, análisis que debe enmarcarse en los límites de la lógica formal, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.”

Conforme lo anterior, los hechos asentados en la sentencia debían establecerse según las probanzas rendidas en juicio. Y como hemos señalado insistentemente, esta parte demandada compareció a la audiencia incorporando concluyente prueba que acreditaba en forma clara, seria e incuestionable, la circunstancia de verificarse todos los hechos descritos en las cartas de despido de los demandantes.

Al respecto, el artículo 456 del Código del Trabajo establece que la prueba la apreciará el Juzgador de acuerdo con las normas de la sana crítica y, de un examen de la sentencia, aparece que el fundamento del juzgador para determinar que los despidos son injustificados es precisamente una serie de hechos que esta parte acreditó fehacientemente en juicio.

Además de lo anterior, existe una desatención a lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, desde que el sentenciador, al apreciar la prueba, en general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador.

Por el contrario, se establece la sentencia desestimando la gravedad y precisión de la prueba documental y testimonial que, en cuanto a su multiplicidad, gravedad y concordancia, tampoco fue idónea según señala la sentencia. Tal como lo refiere la norma citada, el examen de las pruebas debe conducir lógicamente a la conclusión



que convence al sentenciador, lo que por cierto no ocurre en la sentencia recurrida. El juez a quo arribó a una conclusión errada a pesar de las contundentes pruebas allegadas al proceso.

En cuanto a la consideración de la prueba, la doctrina ha establecido: “Así: a) la multiplicidad es asumida como indicadora de una necesidad de pluralidad y variedad de medios de prueba; b) la gravedad concierne a la circunstancia que ha de existir una relación de causa efecto entre el medio de prueba y el hecho al que conduce; c) la precisión alude al imperativo que el medio de prueba no sea susceptible de más de una interpretación, que sea certero en su significado y que, por ende, no se preste para conducir a conclusiones distintas; d) la concordancia, en el sentido que los medios de prueba deben guiar todos a un mismo objetivo, y e) la conexión, es decir, que los medios de convicción deben estar entrelazados de tal manera que impongan la exclusión o la depreciación de aquellos medios desconectados o aislados del resto del material probatorio.”<sup>3</sup>

Lo confirma el Ministro don Omar Astudillo al señalar: “Por lo tanto, para tener por probado o no probado un hecho, en la sentencia tendrían que tomarse en consideración los señalados lineamientos de multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión. En síntesis, la correspondiente decisión probatoria tendría que quedar definida por el grado o nivel de confirmación que el material probatorio proporciona a los hechos aseverados por el respectivo litigante.”

La sana crítica se fundamenta especialmente en un sistema de valoración probatoria radicado en un procedimiento racional, ya que, si bien la ley no ha fijado la contundencia, peso o eficacia de los medios de prueba, otorga al juzgador ciertas facultades para escoger, jerarquizar, y ponderar los diferentes medios de prueba. Sin embargo, ese mismo Juez debe observar ciertos criterios de racionalidad que importan un importante límite a la actividad jurisdiccional.



Así las cosas, se han desarrollado extensamente determinadas reglas que los Jueces no pueden quebrantar al ejercer su ministerio, que dice relación con la valoración probatoria, y que, por ende, encuadran o dirigen las atribuciones jurisdiccionales, evitando espacios para el arbitrio. Es por ello, que la doctrina está conteste en que esos criterios serían (i) las reglas de la experiencia, (ii) los conocimientos científicos, y (iii) las reglas de la lógica.

En el caso de marras denunciemos específicamente la vulneración de las reglas de la lógica, que se encuentran a su vez constituidas por leyes fundamentales donde encontramos la coherencia y la derivación. La coherencia entendida como una cierta concordancia que siempre deben existir entre los elementos del pensamiento, dentro de los cuales encontramos principios formales, que son los siguientes:

- a. Principio de la identidad, por el cual una cosa solo puede y debe ser igual a si misma;
- b. Principio de la no contradicción, en que, si dos juicios se contraponen, implica que ambos serian falsos; y
- c. Principio del Tercero excluido, que establece que, si una cosa solo puede explicada dentro de dos proposiciones contrapuestas, una debe ser falsa y la otra verdadera.

Por otro lado, la derivación debe ser entendida como una regla que implica que cada pensamiento o razonamiento debe provenir necesariamente de otro con el cual se encuentra relacionado, de donde podemos obtener el denominado principio de la razón suficiente, y es este preciso fundamento o premisa que vemos vulnerado, al entender que como señala don Omar Astudillo “(...) una motivación fáctica puede ser calificada de lógica cuando se sujeta a las reglas para el recto entendimiento humano exteriorizado. Por ende, debe ser coherente (cuando respeta los principios de identidad, no contradicción y tercero excluido), de modo que podrá tacharse de defectuosa si es incongruente, contradictoria, equivoca o ambigua, y, además, debe ser derivada, en términos que se encuentre constituida por inferencias



razonables, deducidas de las pruebas y de la sucesión de datos extraídos de las probanzas.”<sup>5</sup> (El destacado es nuestro)

Resulta patente que el proceso de reestructuración del establecimiento Unimarc de Caupolicán y demás a nivel nacional sí existe, de hecho, así lo entiende la propia sentencia, y que la desvinculación de los actores se encuentra amparados específicamente en la potestad de mando y dirección del empleador de elegir a quienes desvincular, lo que sucede es que el sentenciador desecha sin razón justificada sendas declaraciones de testigos, prueba confesional y decisiva prueba documental.

Tal como se aprecia de la sentencia recurrida, principalmente se infringen el principio de identidad y de la razón suficiente, ya que de la lectura de los principales argumentos de la sentencia ya indicados y hechos establecidos, se desprende que la sentencia contiene errores lógicos que la hacen inválida.

Las infracciones denunciadas se producen, entre otros, en el considerando Noveno: “NOVENO: (...) Ahora la segunda parte de esta comunicación habla de las modificaciones en la productividad por cambios en el mercado, variación en la comprar de clientes, aumento en manufactura e insumos, modificaciones en la legislación, agrega que estas constituyen condiciones externas las que finalmente lo llevan a desvincular trabajadores.

Que con relación a estas condiciones externas se pasaran a revisar, para ver si se encuentra acreditadas.

1.- Cambios en las condiciones del mercado, esto es genérico, pero se podría relacionar con las situaciones que se indican a continuación.

a). -Variación en el comportamiento de compras de los clientes, esta situación se puede vincular con la pandemia, en relación a este aspecto la absolvente de posiciones Zilpa Esparza sostuvo que ahora el cliente se dirige solo a comprar el producto específico, y los testigos Pardo y Reyes manifestaron que las ventas se vieron afectadas por las



cuarentenas y máximos de aforos impuestos por la autoridad, lo que hizo que se cambiara el horario cerrando más temprano, y se trabajara en sistema de turnos, agregan que la secciones más afectadas fueron panadería pastelería, bodega y recepción.

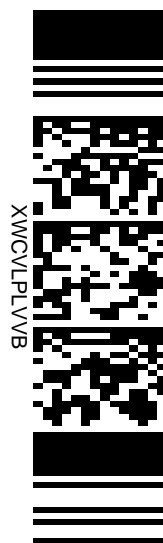
b). - Aumentos en los costos de manufacturas y servicios, no hay prueba este respecto. c). -Modificaciones en la legislación que afectan no solo a esa industria, sino que, al mercado laboral en general, la única relación con esto pudiese ser como señala la absolvente en posiciones con la normativa para cuidarse del Covid por la cual la empleadora debió implementar medidas sanitarias, lo que ocurrió en forma general con todo el comercio y lo que no se sabe cuánto durará.

Que si bien la demandada ha acreditado que hubo despidos de trabajadores a nivel nacional por un total de 2.420, los que se verifican en el oficio acompañado en causa O-202-20, lo que se ratifica con las causas citadas en un total de 8 seguidas ante este tribunal por los mismos motivos.

Que la parte ha logrado acreditar la existencia de despidos a nivel nacional, pero sin que probara una restructuración a ese nivel que modificara la forma en que se replantea su negocio y una reducción de personal para ajustarse a las nuevas condiciones de trabajo debido a la pandemia mundial, sin que acreditara los hechos sostenidos en la carta aviso como para dar por probada condiciones objetivas, graves y permanentes que den por configurada la causal.” (El destacado es nuestro)

Así las cosas, no hay identidad ni coherencia al no haber concordancia entre los elementos del razonamiento alcanzados por el sentenciador de la instancia al momento de acoger las pretensiones de los demandantes, careciendo de los elementos formales de la identidad y no contradicción.

Con relación a la coherencia, y a los principios que la integran como lo es la identidad y la no contradicción, en efecto todos estos elementos han sido infringidos al momento de acogerse la demanda en

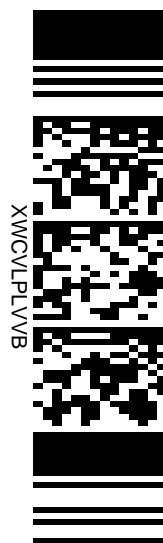


todas sus partes, puesto que, de la prueba rendida en autos por esta parte, respecto de la cual especial no fue tomada en consideración su multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas.

No puede ser sino una falta a las reglas de la lógica considerar para acoger cada una de las pretensiones de los actores, el fundar su decisión en razones insuficientes, sobre todo si es que ni aún existió antecedente alguno que acreditara lo contrario a lo sostenido por esta parte.

Conforme se ha señalado, traemos a colación lo razonado por la propia Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en fallo de fecha 09 de mayo de 2017<sup>6</sup> en que, conociendo de un recurso de nulidad, acoge el mismo por clara infracción de las normas de apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, especialmente por la vulneración del principio de la razón suficiente, que en su parte pertinente refiere: “11° Que, como se aprecia, el juez a quo desecha sin exponer ningún análisis, toda la prueba de la parte trabajadora demandante, limitándose a expresar que no alcanza el estándar suficiente para determinar la procedencia de lo pretendido, sin dar razones para ello, observándose lo mismo cuando señala, en cambio, que “tanto la documental como la testimonial de la demandada demuestran...” lo que en definitiva concluye, no expresando, en consecuencia, las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud desestimó las pruebas de la parte trabajadora y asigna valor a las del empleador, ni de qué manera ha tomado en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que le correspondía utilizar, para que el examen condujera lógicamente a la conclusión que lo ha convencido.

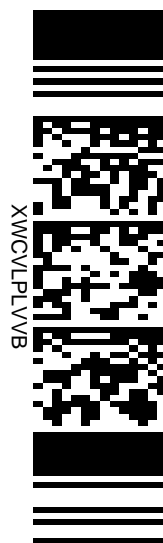
12° Que, en tales condiciones, aparece evidente la existencia de una clara infracción al principio lógico de razón suficiente, planteado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz, según el cual nada puede ser



nada más "porque sí", pues todo obedece a una razón, por lo que lo concluido no cumple ni aun mínimamente el imperativo que a toda decisión judicial es exigible, en cuanto a ser el resultado de una estimación racional de los medios de prueba producidos y que se exteriorice luego en una explicación, del mismo modo racional, sobre "por qué se decidió de esa manera -y no de otra-, explicación que deber ser comprensible y compartible por cualquier tercero, también mediante el uso de la razón". "Es por ello, que en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples impresiones de los jueces" (Excma. C.S. Rol 28.842-2015), por cuanto si así es, o si así aparece, al no explicitar el tribunal las razones de su resolución, no será posible controlar si efectivamente la actividad jurisdiccional se ha movido dentro de los parámetros de la lógica y la legalidad o si, por el contrario, el fallo es el resultado de la arbitrariedad." (El destacado es nuestro)

A mayor abundamiento, estimamos también vulneradas las máximas de la experiencia por parte de la sentencia recurrida, definidas por Couture como "normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie"<sup>7</sup>, que a la luz de estas, permitían concluir que la contingencia actual ha tenido el efecto de perjudicar todo el comercio, afectando notablemente todas sus áreas, por las limitaciones y restricciones impuestas por la autoridad, y la disminución de las ventas, todas circunstancias acreditadas en autos.

Con todo lo anterior, el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco debió haber arribado a la convicción de haber ocurrido los hechos señalados en las cartas. De así haberlo hecho, la conclusión inequívoca era que los despidos por la causal de necesidades de la empresa se encuentran justificados, rechazando con ello la demanda por concepto del recargo del 30% de la indemnización por años de





servicio, y rechazando la solicitud de devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía de los actores.

Por lo anterior, solicitaré de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, al acoger el recurso de nulidad por esta causal, anule la sentencia recurrida y dicte una sentencia de reemplazo, que resuelva desechar la demanda de despido injustificado intentada, no dando lugar al pago de indemnización por concepto de recargo y devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía, con expresa condena en costas.

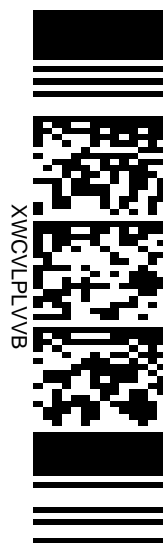
#### SEGUNDA CAUSAL DE NULIDAD DEL ARTÍCULO 477 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.

Alego la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, desde que la sentencia ha sido dictada con infracción de la ley contenida en los artículos 13 y 52 de la ley N°19.728 que establece el Seguro de Desempleo, contravención que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

La infracción denunciada tuvo lugar en la dictación de la sentencia al ser vulnerados los artículos 13 y 52 de la ley N°19.728, al establecer que el descuento del aporte del empleador al seguro de desempleo sólo sería procedente en aquellos casos en que el despido por necesidades de la empresa sea declarado justificado.

La causal de nulidad que se interpone se encuentra establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo, el cual es del siguiente tenor: “Artículo 477. Tratándose de las sentencias definitivas, sólo será procedente el recurso de nulidad, cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales o aquélla se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. En contra de las sentencias definitivas no procederán más recursos.”

En el caso de marras, la sentencia recurrida ha cometido infracción de ley vulnerando lo prescrito en el artículo 13 de la ley



Nº19.728 ya comentada, norma que es del siguiente tenor: "Artículo 13. Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado tendrá derecho a la indemnización por años de servicios prevista en el inciso segundo del artículo 163 del mismo cuerpo legal, calculada sobre la última remuneración mensual definida en el artículo 172 del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración, a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior, caso en el cual se aplicará esta última.

Se imputará a esta prestación la parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador más rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15.

En ningún caso se podrá tomar en cuenta el monto constituido por los aportes del trabajador, para los efectos de la imputación a que se refiere el inciso anterior." (El destacado es nuestro) En el caso concreto, la infracción de ley se produce al establecer la sentencia que por aplicación del artículo 13 de la ley 19.728, ello obsta a que pueda descontarse el seguro de cesantía a la indemnización por años de servicio porque la causal de necesidades de la empresa invocada resulta ser injustificada.

El juez de la instancia dicta sentencia contra ley, al desatender el tenor literal del artículo 13 de la ley en comento y ordenar la devolución de lo descontado por aporte del seguro de desempleo realizada en los finiquitos.

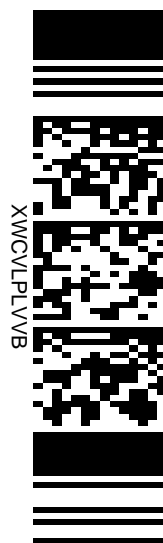
#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Se recurre de nulidad conforme a la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, conforme al cual recurso de nulidad es procedente cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Para la recurrente, se



han vulnerado el principio de identidad y de la razón suficiente. Estima, que, no hay identidad ni coherencia al no haber concordancia entre los elementos del razonamiento alcanzados por el sentenciador de la instancia al momento de acoger las pretensiones de los demandantes, careciendo de los elementos formales de la identidad y no contradicción. Indica que, de la prueba rendida en autos por su parte, respecto de la cual especial no fue tomada en consideración su multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas. También, estima vulnerada las máximas de la experiencia que, a la luz de estas, permitían concluir que la contingencia actual ha tenido el efecto de perjudicar todo el comercio, afectando notablemente todas sus áreas, por las limitaciones y restricciones impuestas por la autoridad, y la disminución de las ventas, todas circunstancias acreditadas en autos.

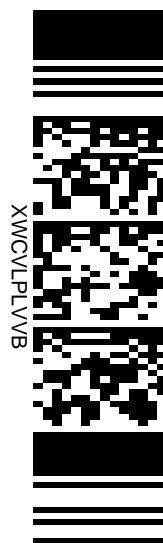
**SEGUNDO:** Que, por el recurso de autos se nos convoca efectuar un control de la logicidad a fin establecer si el razonamiento que realiza el tribunal recurrido al valorar los medios de prueba es formalmente correcto desde el punto de vista de los principios lógico jurídico-invocados. Dado que se parte de la aceptación de las premisas es que, “el control de logicidad, no debe ser aplicado como una nueva valoración de una prueba, ni una interpretación del derecho, se trata simplemente de establecer si ha existido violación de las leyes del pensar, que no admiten criterios valorativos.”(Sara Braithwaite Gadea. El control de logicidad en la casación. *Agora Revista de Derecho*. Año IV-VI. N° 7y 8- 2007-2008. Págs. 435 a 44) En la misma línea, Olsen A. Ghirardi nos recuerda: “Entiéndase bien: no nos referimos a la valoración de las pruebas, ni a la determinación de los hechos en su positiva facticidad, sino a los razonamientos sobre los hechos”. Asimismo, agrega: “No hay mención de valoraciones probatorias o fácticas. Sobre la simple base del «hilo del razonamiento» del juez a quo se muestra y se indica el punto en que ha habido error formal”



(Olsen A. Ghirardi .El razonamiento judicial. Academia de la Magistratura. Perú 1997 Pág. 113 y 119).

**TERCERO:** Que, el principio de la identidad, según Luis García Restrepo “exige que todo concepto y todo juicio sea idéntico a sí mismo, y no se puede cambiar un concepto por otro, con el riesgo de cometer un error lógico” (García Restrepo, Luis E. 2003. Elementos de lógica para el derecho. Bogotá: Temis, pág. 110). Aplicado al proceso intelectual de valoración de las pruebas conlleva que se deben adoptar decisiones similares en casos semejantes, manteniendo el razonamiento realizado para ambos casos. También conlleva que no cabe al valorar desnaturalizar los hechos de la causa, (una cosa es lo que es) toda vez que cabe al juez extraer la identidad natural de la prueba. Así “cuando el juez analiza el alcance de una prueba documental no puede dar un sentido distinto a lo que se desprenda de dicha prueba, esto es, no puede variar un juicio por otro, ya que si lo hace puede cometer un error lógico. (Raúl Montoya Zamora. Las reglas de la lógica en la valoración de las pruebas en materia electoral federal Revista Justicia Electoral, México Vol. 1, N°. 10, 2012, págs. 23-54). También conlleva que, en aplicación de este principio, en la motivación de la sentencia debe darse identidad entre los hechos establecidos y la norma referida a los mismos.

**CUARTO:** Que, la recurrente no desarrolla en particular como a su juicio se ha vulnerado el principio de identidad, limitándose señalar que a su juicio su vulneración se configura al no haber concordancia entre los elementos del razonamiento alcanzados por el sentenciador de la instancia al momento de acoger las pretensiones de los demandantes. También señala que “se infringen el principio de identidad ya que de la lectura de los principales argumentos de la sentencia ya indicados y hechos establecidos, se desprende que la sentencia contiene errores lógicos que la hacen inválida”, con todo, no indica cómo se produce la referida vulneración, esto es, cuáles son las afirmaciones del sentenciador que vulneran dicho principio y que



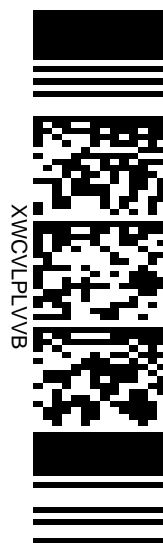
podrían conllevar desnaturalizar los hechos de la causa, al extraer la identidad natural de la prueba.

**QUINTO :** Que, en el considerando noveno el sentenciador concluye que la actora ha logrado acreditar la existencia de despidos a nivel nacional, pero sin que probara una restructuración a ese nivel que modificara la forma en que se replantea su negocio y una reducción de personal para ajustarse a las nuevas condiciones de trabajo debido a la pandemia mundial, sin que acreditara los hechos sostenidos en la carta aviso como para dar por probada condiciones objetivas, graves y permanentes que den por configurada la causal”.

**SEXTO:** Que, en este contexto, lo que se cuestiona es que la conclusión de la falta de acreditación de los hechos sostenidos en la carta aviso, cuestionamiento que dice relación con pretender que se efectúe una nueva valoración de la prueba y no con problemas de falta de lógica en el razonamiento del sentenciador, por lo que será desestimada esta primera alegación.

**SEPTIMO:** Que, acto seguido la recurrente sostiene que se vulneró el principio lógico de razón suficiente ya que en el proceso de reestructuración del establecimiento Unimarc de Caupolicán y demás a nivel nacional sí existe, de hecho así lo entiende la propia sentencia, y que la desvinculación de los actores se encuentran amparados específicamente en la potestad de mando y dirección del empleador de elegir a quienes desvincular, lo que sucede es que el sentenciador desecha sin razón justificada sendas declaraciones de testigos, prueba confesional y decisiva prueba documental.

**OCTAVO:** Que, nuevamente se deberá descartar la infracción invocada, que no parece debidamente justificada por la recurrente, ya que lo que ella plantea está claramente fuera de la hipótesis que ampara este principio, conllevando al igual que el caso anterior efectuar una nueva valoración de la prueba. Adicionalmente el razonamiento del Tribunal contenido en el considerando noveno es correcto cuando señala que el estallido social y la pandemia



efectivamente es un hecho notorio y público que no requiere, pero que, sin perjuicio de ello, la demandada tenía que probar las necesidades de la empresa que invoca, no pudiéndose deducir del solo hecho del estallido, la justificación que alega la recurrente, cuestión esta última que requiere de prueba específica, lo que no ocurrió en autos.

**NOVENO:** Que, finalmente la recurrente, estimas también vulneradas las máximas de la experiencia por parte de la sentencia recurrida, las que permitían concluir que la contingencia actual ha tenido el efecto de perjudicar todo el comercio, afectando notablemente todas sus áreas, por las limitaciones y restricciones impuestas por la autoridad, y la disminución de las ventas, todas circunstancias acreditadas en autos

**DECIMO:** Que, como señala Friedrich Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos” (Stein, Friedrich. El conocimiento privado del juez. 2a.ed. Temis. Bogotá. 1988. Pág. 27). Para don Héctor Oberg Yáñez son elementos comunes a las máximas de experiencia: " 1. Son valoraciones con contenido general, propio e independiente, lo que permite darle a la valoración un carácter lógico; 2. Tienen vida propia la cual se genera de hechos particulares y reiterados de la vida en sociedad, mediante el proceso inductivo del juez que los aplica; 3. No nacen ni mueren con los hechos, sino que se prolongan más allá de los mismos, y van a tener validez para otros nuevos; 4. Son razones inductivas acreditadas en la regularidad o normalidad de la vida, y, por lo mismo, implican una regla, susceptible de ser utilizada por el juez para un hecho similar; 5. Las máximas carecen de universalidad. Están restringidas al medio físico en que actúa el juez, puesto que ellas nacen de las relaciones de la vida y comprenden todo lo que el juez tenga como experiencia



propia "(Oberg, H. Las máximas de la experiencia. Revista de Derecho Universidad de Concepción. N°1 1878. Año LIII, Julio Diciembre de 1985. Pág. 53 a 58).

**UNDECIMO:** Que, ninguna máxima de experiencia es citada por el recurrente, solo se indican afirmaciones genéricas no constitutivas de máximas, y que convocan a tratar de efectuar una nueva valoración de la prueba que, como es bien sabido, no es posible a través de esta vía recursiva, razón por la cual será desestimada también esta alegación.

**DUODECIMO :** Que, además, debe considerarse, que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral, y, asimismo, a esta Corte le está vedado de efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste y el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el cumplimiento de este límite lo que corresponde controlar, a través del llamado control de logicidad, cuando se invoca la correspondiente causal de nulidad, lo que en el presente caso no es posible al no haberse invocado por la recurrente ningún principio específico de la lógica, ninguna máxima experiencia o conocimiento científicamente afianzado que haya sido vulnerado por el sentenciador.

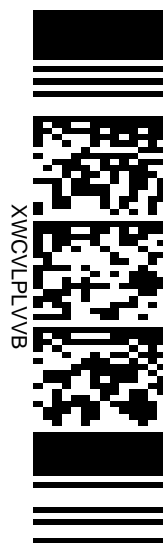
**DECIMO TERCERO:** Que, por todo ello será desestimada esta causal de nulidad alegada.

**DECIMO CUARTO:** Que, se invoca la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en primer lugar, ya que la sentencia ha sido dictada con infracción de la ley contenida en los artículos 13 y 52 de la ley N°19.728 que establece el Seguro de



Desempleo, contravención que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Se sostiene, que la infracción tuvo lugar en la dictación de la sentencia al ser vulnerados los artículos 13 y 52 de la ley N°19.728 al establecer que el descuento del aporte del empleador al seguro de desempleo sólo sería procedente en aquellos casos en que el despido por necesidades de la empresa es declarado justificado, cuando a juicio de a recurrente el legislador al regular la materia en el artículo 13 de la referida ley, no realiza referencia alguna respecto de si el despido por necesidades de la empresa es o no justificado, remitiéndose únicamente a la potestad y determinación del empleador, unido a otras consideraciones que indica.

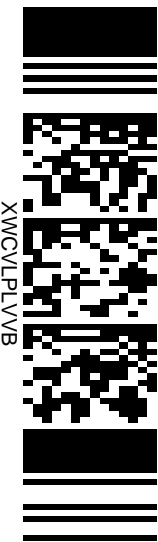
**DECIMO QUINTO:** Que, la ley N°19.728, obliga al trabajador a cotizar para su Cuenta Individual de Cesantía un 0,6% de sus remuneraciones y al empleador aportar el 1,6% de su cargo. El empleador, además de cotizar el porcentaje señalado, debe cotizar de su costo, para un Fondo Solidario de Cesantía el 0,8% de la remuneración del trabajador, Fondo que se complementa con el aporte mensual de 18.816 UTM que mensualmente hará el Estado. Ahora bien, la referida ley estableció en su inciso 2° del artículo 13 que la eventual indemnización por años de servicios a que tendría derecho el trabajador en el caso de ser despedido por el artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa, no se ve afectada, pero se imputa a esta indemnización la parte del Saldo de la Cuenta Individual de Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador (1,6%) más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan. De esta manera, el empleador se encuentra facultado para descontar de la indemnización por años de servicio la parte correspondiente al 1,6% que se ha aportado a la cuenta individual del trabajador. Con todo, el empleador que pretende imputar a la indemnización sus aportes al sistema de cesantía deberá solicitar a la Administradora de Fondos de Cesantía que le determine el monto de tales aportes, así como la rentabilidad que generó.





**DECIMO SEXTO:** Que, la expresión: “Si el contrato terminare por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo” no alude, a la causal eventualmente invocada por el empleador, para poner término al contrato de trabajo, sino a la que real y jurídicamente ha tenido lugar, y cuando el despido es declarado injustificado, lo que se determina es que no ha existido causal, razón por la cual la declaración del empleador efectuada al tiempo del despido, se estima como inexistente, y para todo los efectos, la relación laboral terminó irregularmente sin que exista causal válida para ello.

**DECIMO SEPTIMO:** Que, a mayor abundamiento, en sentencia de 13 de abril de 2020 (Rol N° 18185-2019) de la Excma. Corte Suprema se mantiene la tesis antes indicada señalándose además en el considerando séptimo : “Que, por otra parte, se debe tener en consideración el objetivo del legislador al establecer el inciso segundo del artículo 13 de la Ley N°19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en casos en que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo. Es así como, tratándose de una prerrogativa, debe ser considerada como una excepción, y por lo tanto, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, lo que lleva a concluir que sólo puede proceder cuando se configuran los presupuestos del artículo 161 mencionado, esto es, cuando el despido del trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por sentencia judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es posible que el empleador se vea beneficiado, siendo autorizado para imputar a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía”. Este planteamiento ha sido reiterado por la Excma. Corte Suprema en las sentencias de 18 de marzo de 2021, Rol 24.238-2019; de 09 de abril de 2021, Rol N°27.722-2019, de 09 de abril de 2021, Rol N°29.717-2019, de 21 de julio de 2021, Rol 66.990-2020, de 26 de



agosto de 2021, Rol 19.543-2020, de 26 de agosto de 2021, Rol 79.070-2020 entre otras.

**DECIMO OCTAVO:** En este contexto, habiéndose declarado injustificado el despido que afectó a don Julio Pinto Silva, no es posible estimar que la relación laboral terminó por aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo, sino que por el contrario la misma concluyó porque el empleador terminó irregularmente la misma, razón por la cual empleador carece del derecho a retener el seguro de cesantía en los términos autorizados por el artículo 13 de la ley N° 19.728, no apreciándose, por lo mismo, infracción de ley en el contenido de la sentencia definitiva de autos.

Y visto además lo dispuesto en el artículo 477, 478 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, con costas,** el recurso de nulidad deducido por don ROMÁN GÓMEZ CONTRERAS, en representación de la demandada Rendic Hermanos S.A., en los autos ordinarios laborales caratulados “TRONCOSO TRONCOSO WALTER WLADIMIR Y OTROS con RENDIC HERMANOS S.A.”, RIT O-224-2021, contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2021, dictada por la Jueza del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, doña Viviana Ibarra Mendoza, la que en consecuencia no es nula.

Redacción del abogado Integrante Roberto Contreras Eddinger.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° Laboral - Cobranza-305-2021 (pvb).



Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidenta Ministra Sra. María Georgina Gutiérrez Aravena, Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez y abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger. Se deja constancia que el abogado integrante Sr. Roberto Contreras Eddinger no firma la sentencia que antecede, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a cinco de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

